



**HAL**  
open science

## La transición de 1978 en Bolivia

Sebastian Urioste Guglielmone

► **To cite this version:**

Sebastian Urioste Guglielmone. La transición de 1978 en Bolivia. Les Études du CERI, 2019, 239-240, pp.47 - 51. hal-03457719

**HAL Id: hal-03457719**

**<https://sciencespo.hal.science/hal-03457719v1>**

Submitted on 30 Nov 2021

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

## La transición de 1978 en Bolivia

Sebastián Urioste

La sorprendente rapidez con la cual las huelgas de hambre de 1978 aceleraron el fin de la dictadura militar de Hugo Banzer e iniciaron la transición democrática en Bolivia requiere un análisis a la luz del carácter autoritario y precario de su gobierno.

### El *Banzerato* (1971-1978)

El primer gobierno de Hugo Banzer<sup>1</sup> inauguró una serie de golpes de estado militares acaecidos a lo largo de la década de 1970 en América Latina para impedir que los movimientos y partidos reformistas de izquierda que podían desafiar al capitalismo llegaran al poder. El carácter excepcionalmente represivo de este gobierno, combinado con sus ambiciones en materia de desarrollo económico, permite catalogarlo entre los “estados terroristas” de la época<sup>2</sup>.

Este nuevo régimen militar fue la respuesta al gobierno progresista, efímero y accidentado del general Juan José Torres (octubre de 1970-agosto de 1971), que había propuesto públicamente la mitad de los ministerios de su gabinete a la organización sindical socialista más grande, la Confederación Obrera Boliviana (COB), al tiempo que abogaba por la intervención del Estado en una economía mixta y la restricción del capital extranjero<sup>3</sup>. En enero de 1971, un primer intento de golpe de estado encabezado por el coronel Banzer fue frustrado por la convocatoria a una huelga general y la llegada a La Paz de mineros armados. En junio del mismo año, una “Asamblea Popular” se reunió en la Cámara de Diputados. Como “órgano del poder popular” opuesto al “parlamento burgués”, esta asamblea estaba compuesta por representantes de sindicatos y partidos de izquierda que proclamaron pocos días después que se constituía como “dirección y centro unificador del movimiento antiimperialista”, dirigido por el “proletariado” y cuya finalidad era “la liberación y la instauración del socialismo en Bolivia”<sup>4</sup>. Paralelamente, a finales de julio, una “Vanguardia Militar del Pueblo” proclamó la necesidad de crear un “Ejército del Pueblo”, comandado por suboficiales y sargentos en servicio activo<sup>5</sup>. Este llamado fue decisivo para convencer a los militares bolivianos de derrocar a uno de los suyos y para obtener el apoyo de partidos políticos visceralmente enemigos. Así, Hugo Banzer dirigió un nuevo gobierno cívico-militar en nombre de un Frente Popular Nacionalista (FPN) compuesto por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y la Falange Socialista Boliviana (FSB), dos partidos nacionalistas<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Hugo Banzer Suárez fue elegido Presidente de la República de Bolivia en 1997 por el Parlamento, tras obtener una mayoría de votos (20,9% de los votos emitidos) en las elecciones presidenciales.

<sup>2</sup> O. Dabène, *L'Amérique latine à l'époque contemporaine*, París, Armand Colin, 2016, pp. 156-158.

<sup>3</sup> El gobierno del general Juan José Torres es asociado a menudo con los gobiernos militares descritos como “progresistas” durante este período, como los de Juan Velázquez Alvarado en Perú, el general Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador y el general Omar Torrijos Herrera en Panamá.

<sup>4</sup> J. Dunkerley, *Rebelión en las venas*, La Paz, Plural, 2003, p. 241.

<sup>5</sup> G. Prado, *Poder y fuerzas armadas (1949-1982)*, La Paz, Los Amigos del libro, 1984, p. 322.

<sup>6</sup> El MNR dirigió el golpe de Estado del 9 de abril de 1952. Este acontecimiento precipitó la derrota del ejército y la “Revolución Nacional”, cuyas principales características fueron la reforma agraria y la nacionalización de

Muy rápidamente, una serie de decretos estableció un marco legal específico contra los delitos políticos, incluyendo la restauración de la pena de muerte en caso de participación en la guerrilla<sup>7</sup>, así como la detención ilimitada por cualquier violación de “la paz, el orden público y la seguridad del Estado”<sup>8</sup>. Uno de los picos de represión se produjo a finales de 1972, cuando el gobierno devaluó el peso boliviano en un 67% para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional<sup>9</sup>. Para contrarrestar las protestas que inevitablemente seguirían —no se había producido ninguna devaluación en catorce años— el coronel Banzer instauró el estado de sitio el 22 de noviembre<sup>10</sup>. Cuatro meses más tarde, en marzo de 1973, se restableció una ley de seguridad del estado para “consolidar el proceso de desarrollo”<sup>11</sup>.

Si bien el descontento general fue contenido temporalmente, no fue así dentro de la FPN. En agosto de 1973, un grupo de la FSB intentó, sin éxito, un movimiento subversivo en Santa Cruz. Asimismo, el golpe de estado contra Salvador Allende en Chile en septiembre de ese año había llevado una parte de las fuerzas armadas a seguir la tendencia de los países vecinos hacia dictaduras exclusivamente militares<sup>12</sup>. Al final, los desacuerdos sobre las elecciones programadas para 1974 llevaron al MNR y al FSB a abandonar oficialmente el gobierno.

En enero de 1974, el gobierno, políticamente debilitado, decretó la reducción de los subsidios públicos a una serie de productos básicos con el fin de realizar ahorros. Impugnadas por huelgas y marchas de protesta, estas medidas fueron combatidas principalmente en el Valle de Cochabamba por agricultores que no habían recibido ningún bono y a los que se les prohibió aumentar sus precios en los mercados<sup>13</sup>. En señal de protesta, dichos agricultores ocuparon carreteras, lo cual fue asimilado a actividades subversivas y desencadenó un segundo estado de sitio, seguido de un ataque combinado de aviones de combate y vehículos blindados. Conocida como la “Masacre del Valle”, esta operación marcó el fin del “pacto militar-campesino” iniciado por el general Barrientos en 1964<sup>14</sup>.

La indignación que provocó llevó al gobierno a entablar conversaciones con el general Augusto Pinochet, presidente no electo de Chile, sobre el tema marítimo<sup>15</sup>. En abril de 1974,

---

las minas de los tres “barones” de Bolivia que, en conjunto, producían una cuarta parte del estaño en el mundo. La principal oposición al MNR de las clases medias se organizó en torno a la FSB. Antes del golpe de 1971, el MNR y la FSB se consideraban enemigos irreductibles. Ver: S. Urioste, “Los orígenes del golpe de Estado en Bolivia”, in *Political Outlook de América Latina, Observatorio Político de América Latina y el Caribe*, Sciences-Po Paris, OPALC-Universidad Externado de Colombia, 2015, pp. 47-48.

<sup>7</sup> Decreto-Ley N° 9980 del 5 de noviembre de 1971.

<sup>8</sup> Decreto 10295 del 2 de junio de 1972.

<sup>9</sup> J. Dunkerley, *Rebelión en las venas*, op. cit., p. 260.

<sup>10</sup> Después del golpe de estado del 21 de agosto, que produjo la muerte de 98 personas tan sólo en Santa Cruz, las organizaciones de derechos humanos estiman que entre octubre de 1971 y diciembre de 1972, 200 personas fueron ejecutadas, 14.750 encarceladas y 19.140 obligadas a exiliarse (ver: J. Dunkerley, op. cit., pp. 246 y 259).

<sup>11</sup> G. Prado, *Poder y fuerzas armadas (1949-1982)*, op. cit., p. 350.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pp. 358-359.

<sup>13</sup> J.-P. Lavaud, *L'instabilité politique de l'Amérique latine. Le cas de la Bolivie*, Paris, L'Harmattan/IHEAL, 1991, p. 192.

<sup>14</sup> Después de poner fin a la “Revolución Nacional” con un golpe de Estado en 1964, el general René Barrientos logró aliar a los sindicatos campesinos con su gobierno para contrarrestar las movilizaciones de los mineros y la oposición de las clases medias. Ver: S. Urioste, op. cit. p. 51.

<sup>15</sup> A fines del siglo XIX, Bolivia perdió el acceso al océano Pacífico después de un conflicto con Chile.

un documento del Alto Mando boliviano concluyó que la postergación indefinida de las elecciones de 1975 sería una forma de garantizar una tregua política, asegurando así buenas negociaciones con Chile<sup>16</sup>. Las protestas que siguieron a estas declaraciones llevaron al presidente Banzer, que entretanto se había convertido en general, a prorrogar el estado de sitio hasta enero.

En noviembre de 1974, un nuevo movimiento insurreccional de la FSB, esta vez apoyado por el regimiento de élite Manchego, condujo al presidente Banzer a declarar el estado de sitio en todo el territorio boliviano y a dirigir personalmente el contrataque. En el “Estatuto del Gobierno” que siguió a estas operaciones, el gobierno asumió explícitamente por decreto la responsabilidad política, administrativa y gubernamental de las fuerzas armadas hasta 1980 y formuló una serie de medidas para estimular el “desarrollo económico y social” y consolidar la “seguridad interna y externa” del país<sup>17</sup>. El capítulo “social” de este decreto establecía que el gobierno podía reclutar a cualquier persona a través del servicio civil obligatorio y someterla a la jurisdicción militar. Los últimos cuatro artículos afinaron su dimensión coercitiva: se prohibió toda “actividad política o de proselitismo” y se sancionaría la dirigencia de “entidades patronales, sindicales, profesionales, empresariales, estudiantiles y universitarias”, así como la de todas las “organizaciones e instituciones públicas o privadas” que se dedicasen a “tareas distintas de las que a ellas corresponden” o a “actividades políticas”.

En junio de 1976, el cuerpo del ex presidente Juan José Torres fue encontrado a cien kilómetros de Buenos Aires, la capital donde había vivido en el exilio desde el golpe de estado de 1971. Su asesinato fue inmediatamente atribuido a Banzer. Las manifestaciones de rechazo y luto se extendieron, sobre todo en el campo minero de Siglo XX, epicentro de la actividad sindical, y desencadenaron un nuevo estado de sitio para erradicar los elementos subversivos que perjudicaban el “plan quinquenal de desarrollo”<sup>18</sup>. Seis distritos mineros fueron declarados “zonas militares”, novecientos cincuenta trabajadores fueron despedidos y varios dirigentes fueron exiliados<sup>19</sup>.

## Un final apresurado

Este preámbulo sobre el *Banzerato* era necesario para entender las circunstancias de las huelgas de hambre de 1978. Así, el agotamiento gradual de la presidencia de Banzer estuvo tan ligado a las diversas oposiciones de la sociedad civil y de los sindicatos, como al desmoronamiento de su coalición de gobierno. Una vez roto el pacto que unía a las fuerzas armadas con los sindicatos campesinos y la alianza con el MNR y la FSB, su margen de maniobra y sus vínculos fuera del ejército se vieron considerablemente reducidos.

A esta observación hay que añadir dos elementos esenciales. En primer lugar, mientras que el régimen militar de Hugo Banzer se asemeja a los poderosos y ambiciosos “Estados

---

<sup>16</sup> G. Prado, *Poder y fuerzas armadas (1949-1982)*, op. cit., pp. 367-368.

<sup>17</sup> Decreto Supremo n° 11947 del 7 de noviembre de 1974.

<sup>18</sup> Decreto Supremo n° 13641 del 9 de junio de 1976.

<sup>19</sup> J. Dunkerley, *Rebelión en las venas*, op. cit., pp. 285 y 293.

terroristas” de los años setenta, las fuerzas armadas bolivianas no eran monolíticas, y la autoridad del presidente no era incuestionable. Como señala Jean-Pierre Lavaud:

“Cuando el general Hugo Banzer Suárez tomó el poder el 21 de agosto de 1971, el ejército ya estaba en el poder desde el 5 de noviembre de 1964. Los sucesivos golpes de Estado que lo han sacudido han demostrado claramente que estaba dividido: desavenencias organizativas tradicionales, entre armas, generaciones, promociones; ruptura entre los soldados de los cuarteles y los que ocupan cargos de responsabilidad acusados de enriquecimiento ilícito o represión abusiva; disputas ideológicas que oponían los nacionalistas a los liberales, los constitucionalistas a los que defendían el mantenimiento de la fuerza militar a la cabeza del país. La duración del gobierno de Hugo Banzer sugiere que logró al menos una apariencia de unidad dentro de las fuerzas armadas. En realidad, este no era el caso. Las purgas de oficiales rivales de alto rango y los repetidos intentos de golpe de Estado son las señales más visibles de ello”<sup>20</sup>.

Así, muy pronto, Banzer tuvo que eliminar a muchos competidores de las filas de las fuerzas armadas<sup>21</sup>. Sin embargo, fueron las negociaciones con Chile sobre el tema marítimo las que fortalecieron su oposición interna: las negociaciones con Pinochet fracasaron y la posibilidad misma de un trueque territorial conmovió a muchos oficiales<sup>22</sup>, a tal punto que Banzer renunció a presentarse a las elecciones.

El segundo aspecto que merece destacarse es la gran dependencia del gobierno de Banzer de los Estados Unidos. Mientras que en 1971 el golpe de estado fue apoyado por el presidente Nixon, la elección de Jimmy Carter en 1977 marcó un punto de inflexión para la dictadura de Banzer. De hecho, al colocar los derechos humanos en el centro de su política exterior, el nuevo presidente norteamericano obligó al presidente boliviano a adelantar las elecciones generales previstas para 1980 por el “Estatuto de Gobierno”. Se decidió que los comicios tendrían lugar en 1978 y que su sucesor designado, el general Juan Pereda Azbun, Ministro del Interior, sería el candidato de las fuerzas armadas.

El anuncio de estas elecciones anticipadas fue una oportunidad para una campaña nacional e internacional en favor de una amplia amnistía para los prisioneros y exiliados con motivo de las fiestas de Navidad de 1977. Pero estas expectativas fueron ampliamente decepcionadas en vista del limitado número de personas que el gobierno aceptó indultar. Es en este contexto que, el 28 de diciembre, cuatro esposas de mineros de Siglo XX cuyos conyugues habían sido encarcelados o despedidos, iniciaron una huelga de hambre, acompañadas de sus hijos. Ellas retransmitieron una serie de demandas que circulaban en ese momento: amnistía general para todos los presos políticos o exiliados, restablecimiento de los empleados despedidos por sus actividades sindicales, autorización de las organizaciones sindicales y abolición de las “zonas militares” en los centros mineros<sup>23</sup>. Acogido por la Arquidiócesis de La Paz, este

---

<sup>20</sup> J.-P. Lavaud, *La Dictature empêchée. La grève de la faim des femmes de mineurs, Bolivie 1977*, Paris, CNRS Editions, 1999, p. 47.

<sup>21</sup> Según Jean-Pierre Lavaud, dicha eliminación fue también llevada a cabo a través los asesinatos de los generales Selich (1973) y Zenteno (1976). Ver: *ibid.*, p. 48.

<sup>22</sup> *Ibid.*, pp. 51-52.

<sup>23</sup> Las informaciones contenidas en este párrafo y en el siguiente fueron extraídas del libro de referencia

primer piquete creció cual bola de nieve y movilizó a mil doscientas personas en veintiocho grupos, principalmente instalados en iglesias e integrados por miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y de la Unión de Mujeres de Bolivia.

Muy pronto, una de las primeras huelguistas, Domitila Chungara<sup>24</sup> se convirtió en portavoz de un movimiento que, gracias a las redes de movilización preexistentes y a la cobertura radiofónica, obtuvo el apoyo y luego la adhesión de múltiples organizaciones, entre ellas la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia —que convocó a la huelga general— y la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Lo mismo ocurrió con personalidades conservadoras que, sin embargo, eran hostiles a la dictadura, como el ex presidente Luis Adolfo Siles Salinas. Un aspecto crucial subrayado por Jean-Pierre Lavaud es que la APDHB, organización perteneciente al ala progresista de la Iglesia Católica, aportó entre diversos otros recursos un “lenguaje común de los derechos humanos” que se convirtió en una “ideología movilizadora y unificadora”<sup>25</sup>. Este léxico fue incorporado por las manifestaciones callejeras y las huelgas, volcando finalmente al resto de la jerarquía de la Iglesia en el campo de los manifestantes cuando el gobierno expulsó y encarceló a los huelguistas el 16 de enero, hasta el punto de amenazar con la excomunión al presidente. Peor aún, un grupo de generales jubilados, incluidos ex ministros, publicaron un documento en el que pedían expresamente la renuncia del presidente<sup>26</sup>.

Arrinconado, el general Banzer cedió a todas las demandas de los huelguistas. El 9 de julio de 1978, día de las elecciones, el fraude a favor del candidato militar fue tan extendido y las protestas tan generalizadas que Banzer rompió con Pereda el 19 de julio. Este último tomó el poder, pero fue derrocado en noviembre de 1978 por jóvenes oficiales que convocaron a nuevas elecciones para el 1ro de julio de 1979. Sin embargo, la fragilidad de los sucesivos gobiernos, la polarización entre los distintos partidos políticos, el maximalismo de los sindicatos obreros y la disposición de algunos oficiales y generales del ejército a permanecer en el poder retrasaron hasta 1982 la llegada de un presidente electo que ya no sería más derrocado por las fuerzas armadas.

En definitiva, los cuatro largos y difíciles años de transición democrática que se iniciaron en 1978 fueron el resultado del apresurado final de una presidencia que intentó cambiar la economía del país con la ayuda de un arsenal legal particularmente represivo y exhaustivo, pero que había perdido gradualmente el apoyo interno y externo que tuviera a su disposición durante el golpe de Estado de 1971.

---

en francés sobre las huelgas de hambre de 1978: J.-P. Lavaud, *La Dictature empêchée. La grève de la faim des femmes de mineurs, Bolivie 1977*, op. cit. Ver : Introducción (pp. 9-10), Capítulo I (pp. 55-56), Capítulo II (pp. 75-80, 83, 97-98), Capítulo III (pp. 137-138), Capítulo IV (pp. 166-167).

<sup>24</sup> Domitila Chungara (1937-2012) ya contaba con el reconocimiento de los medios de comunicación gracias a un libro testimonial publicado unos meses antes. Ver: D. B. de Chungara, *Si me permiten hablar-testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia*, México, Siglo XXI, 1978.

<sup>25</sup> J.-P. Lavaud, *L'Instabilité politique de l'Amérique latine*, op. cit., pp. 116 y 155.

<sup>26</sup> A. L. de la Calle, “ Una huelga de hambre cambió los planes de Banzer”, *El País*, 10 de febrero de 1978.